

**Estado espía: la
“base de datos de
vigilancia” y otras
herramientas**

3 RUSIA



Sergey Shimovolos, defensor de los derechos humanos de Nizhni Nóvgorod. Foto: cortesía de Sergey Shimovolos

RUSIA

Estado espía: la “base de datos de vigilancia” y otras herramientas

el caso

El viaje en tren de 600 kilómetros de Nizhni Nóvgorod a Samara es corto para los estándares rusos, y debería haber sido rutinario para Sergey Shimovolos, director de la Unión de Derechos Humanos de Nizhni Nóvgorod, una asociación no gubernamental que nuclea a diez organizaciones de derechos humanos y ambientales de la región. Pero tan pronto como Shimovolos subió al tren el 13 de mayo de 2007, comenzaron sus problemas.

Tres policías le cayeron encima, demandando ver sus documentos de identidad y conocer el motivo de su viaje. Durante el viaje de 15 horas fue interrogado dos veces más por agentes de policía que controlaron sus documentos, le preguntaron sobre el propósito de su viaje y quisieron saber si tenía conocidos en Samara. Incluso le ordenaron abandonar el tren y seguir a los agentes a la estación de policía, pero él se negó a acatar, y la policía no pudo dar con ningún fundamento legal para detenerlo.

Shimovolos tenía una idea de por qué le estaba ocurriendo eso. Viajaba a Samara para investigar la detención de varios activistas que habían participado en recientes protestas contra el Kremlin, y lo hacía cuatro días antes de que el presidente ruso, Vladimir Putin, fuese el anfitrión de la 19ª Cumbre UE-Rusia del 17 y 18 de mayo de 2007 en el complejo Volzhskiy Utyos de Samara. Entre los invitados estaría la canciller alemana Angela Merkel, que en ese momento ocupaba la presidencia del Consejo de la Unión Europea, y José Manuel Barroso, presidente de la Comisión Europea. En la agenda figuraban negociaciones para el nuevo Acuerdo de Colaboración y Cooperación UE-Rusia, cooperación energética, el despliegue de componentes de un sistema de defensa antimisiles de Estados Unidos en Polonia y la República Checa y la adhesión de Rusia a la Organización Mundial del Comercio. En la agenda también figuraba el historial de Rusia con los derechos humanos, que en 2007 incluyó la preocupación internacional sobre el manejo de las protestas de la oposición conocidas como “Marchas de la disidencia” en diferentes regiones del país durante los dos años anteriores.

Los activistas planeaban otra “Marcha de la disidencia” durante la Cumbre, y por primera vez desde 2005 la marcha había sido aprobada oficialmente por las autoridades locales. Pero eso no impidió que fuerzas policiales llevaran a cabo una serie de detenciones que impidieron que muchos activistas, defensores de los derechos humanos y periodistas pudieran tomar parte en las protestas. En Samara, varios activistas y organizadores de la marcha fueron detenidos con pretextos endebles en los días previos a la Cumbre, y otros destacados activistas que estaban planeando viajar a Samara fueron hostigados en todo el país.

En Moscú, 27 personas fueron detenidas en el aeropuerto de Sheremetyevo en la víspera del evento, incluyendo a los líderes del Frente Civil Unido, Garry Kasparov, Alexander Ryklin y Alexander Osovtsov; al líder del Partido Nacional Bolchevique Eduard Limónov; al reportero del *Wall Street Journal* Alan Callison; al reportero de la televisión holandesa Allard Detiger; al reportero de *Daily Telegraph* Adrian Blumfeld; y a Alexander Petrov, representante de la oficina de Moscú de *Human Rights Watch*. Comparando los nombres de los pasajeros con los que figuraban en una lista, los agentes de policía confiscaron los pasaportes de varias de estas personas y se los devolvieron después de que el avión hubiera despegado, mientras que los oficiales del Servicio Federal de Seguridad (conocido como el FSB) impidieron a otros subir al avión.¹

Las autoridades también se desplegaron a través del sistema ferroviario. Sergey Udaltsov, el líder de la Vanguardia de la Juventud Roja, fue detenido en la estación de ferrocarril Kazanskiy en Moscú cuando estaba comprando los pasajes para el tren Moscú-Samara. Denis Bilunov, director ejecutivo del Frente Civil Unido, fue detenido en un tren que se aproximaba a Samara, con el pretexto de verificar la autenticidad de su dinero de bolsillo. Las detenciones elevaron las alarmas en la comunidad de derechos humanos de Rusia. Para Sergey Shimovolos, el acoso que sufrió en el tren desde Nizhni Nóvgorod fue un ejemplo de aquello que precisamente se disponía a investigar en Samara.

“

De acuerdo con diversas fuentes, la ‘Base de datos de vigilancia’ incluye los nombres de 3800 a 6500 personas, algunas de ellas representantes de la extrema derecha y de organizaciones nacionalistas, y algunas de ellas activistas de los derechos civiles y políticos. Shimovolos fue incluido en la sección titulada ‘Activistas de Derechos Humanos’.

”

Pero el acoso no terminó cuando llegó a Samara. Al descender del tren, Shimovolos fue detenido de nuevo por varios policías. Revisaron sus documentos de identidad y esta vez le ordenaron que fuera con ellos a la comisaría para que pudieran buscar su nombre en lo que llamaron “la base de datos”, amenazando con usar la fuerza si se negaba a cumplir la orden. Shimovolos fue retenido en la estación de policía por unos 45 minutos antes de ser liberado.

Shimovolos estaba enojado. Preocupado por lo que parecía ser una detención coordinada de activistas y periodistas, y por la insinuación de las autoridades de que mantenían una base de datos que incluía a disidentes pacíficos y defensores de los derechos humanos, Shimovolos intentó tres veces presentar reclamos formales contra los policías que lo detuvieron y, cada vez, los fiscales se negaron a abrir un proceso penal contra los agentes. Así, en mayo de 2007 y de nuevo en diciembre de 2008, Shimovolos presentó demandas civiles por su arresto y sus repetidas detenciones y por el hecho de estar incluido en la base de datos de vigilancia del gobierno ruso. Esos esfuerzos tampoco tuvieron éxito, y después de haber agotado todos los posibles recursos jurídicos de Rusia, Shimovolos presentó una solicitud ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con el argumento de que su detención y la recolección de sus datos personales en una base de datos de vigilancia violaban los artículos 5 y 8 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esos procedimientos y las investigaciones que siguieron revelaron no solo que Shimovolos había sido en efecto objeto de hostigamiento oficial deliberado, sino también que las autoridades mantenían un extenso e intrincado sistema de vigilancia destinado a controlar la circulación de personas “sospechosas” en Rusia.

Documentos que salieron a la luz a raíz de las quejas de Shimovolos revelaron que un mes y medio antes de su viaje, el Departamento del Interior de Nizhni Nóvgorod registró su nombre en la denominada “Base de datos de vigilancia” (‘Сторожевой контроль’) mantenida por

la policía. Unas semanas más tarde, a principios de mayo, los departamentos regionales de policía de todo el país fueron alertados de que varias organizaciones de la oposición estaban preparando concentraciones de protesta para que coincidieran con la cumbre UE-Rusia del 18 de mayo, y los agentes fueron instruidos para detectar y detener a todos los miembros de esas organizaciones que viajaran a Samara entre el 8 y el 20 de mayo de 2007; a los oficiales de los aeropuertos y estaciones de tren se les dijo que separaran a esos viajeros de los demás y los disuadieran de continuar hacia Samara. Shimovolos era uno de esos viajeros: después de haber comprado el pasaje de tren de Nizhni Nóvgorod a Samara, los departamentos locales de policía a lo largo de su ruta recibieron mensajes de télex, indicando que estaba viajando a Samara para participar en un evento de la oposición y que podría estar llevando consigo literatura extremista.² Debido a que no llevaba equipaje, la policía no pudo invocar el ardid de buscar literatura extremista; en cambio, fue detenido e interrogado en varias ocasiones durante el viaje. Pero la información en la “Base de datos de vigilancia” persiguió a Shimovolos mucho después de concluida la Cumbre de Samara. Más de un año después, en octubre de 2008, Shimovolos fue detenido en un tren durante un viaje a Moscú. La policía revisó su pasaporte y luego llevó a cabo un extenso registro, primero de su equipaje, luego de su compartimento, y finalmente de todo el vagón; incluso abrieron los paneles de la pared del vagón, en una inspección que retrasó el tren media hora.

A pesar de que las órdenes que crean y rigen el funcionamiento de las bases de datos internas de vigilancia en Rusia se mantienen en secreto, los litigios de Shimovolos ante el TEDH iluminaron algunos detalles cruciales acerca de cómo llegaron a existir esas bases de datos, y la forma en que operan. En dicho procedimiento, el gobierno ruso admitió que desde alrededor del año 2000, las autoridades del Ministerio del Interior de la Federación Rusa habían estado usando una “autopista de búsqueda” de datos (“Розыск-магистраль”) que incluía a personas que figuraban en la de fugitivos de Interpol, a ciudadanos extranjeros sospechosos de delitos cometidos en territorio ruso, a extranjeros cuya entrada a la Federación Rusa estaba prohibida o restringida, a personas sospechosas de una variedad de delitos, desde actos terroristas, asesinato y tráfico de drogas a contrabando de antigüedades y delitos financieros, a líderes y miembros de grupos delictivos organizados y a líderes de comunidades étnicas. La orden que rige la creación y el funcionamiento de la base de datos nunca fue publicada. En 2005, el gobierno ruso amplió la base de datos de la “autopista de búsqueda” para incluir una base de datos de potenciales extremistas cuyo nombre en código era “Base de datos de vigilancia”. En una declaración jurada presentada ante el TEDH, un oficial del Departamento del Interior de la Federación Rusa dijo que la decisión de incluir el nombre de una persona en la “Base de datos de vigilancia” es del Ministerio del Interior o de sus departamentos regionales sobre la base de información confidencial.

De acuerdo con diversas fuentes, la “Base de datos de vigilancia” incluye los nombres de 3800 a 6500 personas, algunas de ellas representantes de la extrema derecha y de organizaciones nacionalistas, y algunas de ellas activistas de los derechos civiles y políticos. Shimovolos fue incluido en la sección titulada “Activistas de Derechos Humanos”. Presionadas para fundamentar la legitimidad de incluir a Shimovolos en la base, las autoridades rusas afirmaron que él había sido uno de los fundadores de Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena, y que también publicaba el periódico *Defensa de los Derechos Humanos* (‘Сторожевой контроль’).

El 21 de junio de 2011, cuatro años después de la Cumbre de Samara, el TEDH declaró que la “Base de datos de vigilancia”, que funcionaba sin las garantías mínimas para prevenir abusos, no cumplía con las normas internacionales del debido proceso y almacenamiento de datos y, más específicamente, que la inclusión del nombre de Sergey Shimovolos en ella (que permitió la recolección de información sobre sus movimientos en tren o avión dentro de Rusia), violó el artículo 8 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que garantiza el derecho al respeto de la vida privada y familiar de una persona. El TEDH concluyó asimismo que la detención ilegal de Shimovolos en la estación de policía de Samara había violado su derecho a la libertad y a la seguridad.

En una entrevista con *Gazeta.ru* poco después de la decisión del TEDH, Sergey Shimovolos reflexionó sobre el camino que recorrió en su búsqueda de la verdad sobre las bases de datos de vigilancia clandestinas del gobierno ruso:

Ante mi insistencia, los agentes de policía de Samara elaboraron un informe de mi detención en el que escribieron que tenían instrucciones para realizar una búsqueda operativa, es decir, había habido un mensaje telefónico sobre mí. Esa fue una pista, y luego la investigación se inició y prolongó durante dos años. Me dirigí a la oficina del fiscal para iniciar una acción penal contra el FSB. En los materiales de investigación se observaba que existía “una base de datos”, en la que había sido incluido bajo la sospecha de organizar las Marchas del disenso. Eso significa que se había establecido un régimen especial de recolección de información sobre una determinada persona, sobre sus movimientos, sus comunicaciones con las autoridades gubernamentales, con la Inspección de Seguridad del Tráfico en Carretera, con cualquier institución. Se crea un archivo personal. Todo eso va junto con la aplicación de medidas preventivas hacia la persona sospechosa de extremismo: si debe ser capturado o advertido; qué explicaciones deben exigírsele. Sin duda alguna, todo eso es ilegal.³

Curiosamente, después de la sentencia que el Tribunal Europeo emitió en el caso de Shimovolos, representantes del Ministerio del Interior intentaron negar la existencia de tal “Base de datos de vigilancia”. La Agencia Interfax citó a un representante del ministerio que afirmaba que no había ninguna



Manifestante grita consignas contra el gobierno durante una protesta en Samara, Rusia, el 18 de mayo de 2007. Numerosos manifestantes marcharon por esa ciudad en una protesta organizada con motivo de una tensa cumbre entre Rusia y la Unión Europea.

Foto: Sergey Ponomarev/AP

disposición para una base de datos con esa denominación en los reglamentos del Ministerio del Interior. Sin embargo, reconocía que los agentes de policía utilizaban dicho término en su práctica operativa y que eso “a veces podía ser malinterpretado por los ciudadanos”.⁴

el contexto

La “Base de datos de vigilancia” es solo uno de los componentes de un sistema de vigilancia integrado que permite a las autoridades rusas supervisar el movimiento y las comunicaciones de personas “sospechosas”, todo en nombre de una lucha muy laxamente definida contra el extremismo. Bajo una ley federal titulada “de neutralización de las actividades extremistas”, que fue promulgada el 25 de julio de 2002 y sigue vigente hoy en día, el “extremismo” incluye no solo la comisión de delitos de odio y amenazas al sistema constitucional, sino también incitar la enemistad hacia grupos sociales, acusar a funcionarios de delitos extremistas e impedir actividades legítimas de autoridades gubernamentales.⁵

En septiembre de 2008, se creó un departamento especial dentro del Ministerio del Interior para luchar contra el extremismo, y se establecieron centros de contraextremismo en cada departamento regional del

Ministerio. Los así llamados Centros “E” se modelaron en base a los antiguos departamentos de lucha contra el crimen organizado, y en muchos aspectos adoptaron los mismos métodos. Al tratar a los opositores al gobierno como transgresores, y echando mano de un sofisticado aparato operativo y de investigación en su contra, los Centros “E” se convirtieron en una herramienta importante del espionaje político en Rusia.

Los procedimientos de búsqueda y vigilancia están regulados por la Ley de Actividades de Búsqueda Operativa de 1995, que regula una amplia variedad de operaciones que incluyen objetivos de vigilancia, el seguimiento de envíos postales y de telecomunicaciones, el acceso y descarga de información y comunicaciones digitales y la infiltración estratégica en grupos específicos. Por regla general, estas actividades operativas pueden llevarse a cabo solo dentro de procesos penales iniciados, y para actividades susceptibles de infringir los derechos constitucionales de los ciudadanos se requiere una orden judicial. Pero la falta de garantías claras para los derechos de los ciudadanos, combinados con la laxitud y la ineficiencia de controles judiciales, abren el camino para que el sistema de actividades de búsqueda sea utilizado como una herramienta para vigilar a miembros de la oposición, activistas políticos y defensores de los derechos. Muchas de estas debilidades salieron a la luz cuando Roman Zakharov, director del centro regional



Garry Kasparov habla con los medios de comunicación en el aeropuerto Sheremetyevo de Moscú el 18 de mayo de 2007. La policía impidió que el campeón ruso de ajedrez y líder de la oposición viajara ese día a la ciudad de Samara, donde planeaba participar en una marcha de protesta en ocasión de una cumbre entre Rusia y la Unión Europea, según explicó un asesor. Foto: Misha Japaridze/AP

de San Petersburgo para la Fundación de Defensa de la Glasnost, sospechó que sus llamadas por teléfono móvil estaban siendo interceptadas y presentó una demanda contra el gobierno ruso en el TEDH. Aunque Zakharov fue incapaz de demostrar que sus llamadas habían sido interceptadas, el tribunal consideró que los procedimientos operativos que regían la intervención de llamadas telefónicas violaban el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. En su dictamen de diciembre de 2015, el tribunal identificó una gran variedad de deficiencias fundamentales en la legislación rusa que permiten a los servicios de seguridad y a la policía eludir la exigencia de la orden judicial e interceptar comunicaciones sin necesidad de obtener una autorización judicial previa.

En primer lugar, el tribunal consideró que la legislación rusa no restringe lo suficiente la lista de personas cuyas comunicaciones telefónicas pueden ser interceptadas. Los objetivos potenciales no se limitan a personas sospechosas o acusadas de delitos, por ejemplo, sino que también pueden incluir a cualquier persona que pueda tener información sobre un delito o cualquier otra información que pueda ser relevante en un caso criminal. Por otra parte, el tribunal consideró que la Ley de Actividades de Búsqueda Operativa establece que las llamadas telefónicas y otras comunicaciones pueden ser interceptadas en base a información sobre una amplia y pobremente definida variedad de acontecimientos o actividades que se dice ponen en

peligro la seguridad nacional, militar, económica o ecológica de Rusia.

En segundo lugar, el tribunal se enteró de que, aunque los servicios de seguridad estén obligados nominalmente a obtener una autorización judicial previa a la intervención, no tenían obligación de presentar una autorización de intervención al operador de red móvil. Esta laguna, esencialmente, dio a las autoridades policiales acceso directo a todas las comunicaciones de telefonía móvil y datos comunicacionales relacionados.

En tercer lugar, en virtud de la legislación, incluso cuando un tribunal dicta una orden de intervención telefónica, no es competente para supervisar su aplicación. El tribunal no es informado de los resultados de la vigilancia y no tiene poder para revisar si los servicios de seguridad o la policía cumplen con los términos o requisitos de la orden judicial.

Por último, el tribunal consideró que la policía estaba haciendo una utilización prolífica de estos poderes de vigilancia, con muy poca resistencia por parte de los tribunales. Según los datos publicados por el Departamento Judicial del Tribunal Supremo de la Federación Rusa, en el período comprendido entre 2007 y 2015, los tribunales rusos de jurisdicción general consideraron 4.659.325 solicitudes para monitorear e interceptar llamadas telefónicas y otras comunicaciones, y aprobaron 4.517.515, o el 96,96%, de esas solicitudes.⁶ Por otra parte, el

“

En septiembre de 2008, se creó un departamento especial dentro del Ministerio del Interior para luchar contra el extremismo, y se establecieron centros de contraextremismo en cada departamento regional del Ministerio. (...) Al tratar a los opositores al gobierno como transgresores, y echando mano de un sofisticado aparato operativo y de investigación en su contra, los Centros ‘E’ se convirtieron en una herramienta importante del espionaje político en Rusia.

”

número de solicitudes aumentó de año a año durante ese período, con la mayor tasa de aumento por fuera o antes de la apertura de un proceso penal formal. Con al menos dos personas implicadas en cada una de esas solicitudes de vigilancia, los datos sugieren que en los últimos nueve años un mínimo de nueve millones de personas en la Federación de Rusia –o el 6% de la población– podría haber tenido sus llamadas o comunicaciones interceptadas con autorización judicial. Y teniendo en cuenta que la Corte Europea determinó en el caso Zakharov que existía una falta general de control sobre el acceso que tienen los agentes del orden al aparato de vigilancia, es probable que las llamadas y comunicaciones de muchas más personas hayan sido monitoreadas sin autorización judicial o supervisión alguna.

Para los activistas de los derechos civiles y defensores de los derechos humanos en Rusia, la vigilancia puede incluir no solo el seguimiento de sus movimientos y el monitoreo de sus comunicaciones, sino también la grabación en audio y video de sus actividades diarias.

El 14 de agosto de 2009, miembros de la Asociación Agora descubrieron en sus oficinas una cámara oculta con un micrófono que había estado grabando video y audio de las conversaciones entre los líderes de la organización y visitantes por un período indeterminado. Los pedidos de Agora a las autoridades para poner en marcha una investigación criminal de esa vigilancia ilegal fueron rechazados.⁷ Del mismo modo, en agosto de 2012, una cámara oculta y un micrófono fueron descubiertos en la oficina del Fondo Anticorrupción del político de la oposición Alexey Navalny.⁸

En febrero de 2012, un video de la vida privada del político Vladimir Ryzhkov, que había sido grabado con una cámara oculta, fue subido a internet. En marzo de 2016, un video de la vida privada de otro político, Mikhail Kasyanov, filmado también con una cámara oculta, fue emitido por el canal nacional de televisión NTV. Ambos videos contenían escenas de relaciones íntimas y claramente se habían hecho con el objetivo de exponer públicamente a esas personas.⁹

En todos estos casos, no hubo evidencia directa de que los videos fuesen hechos por las fuerzas del orden. Sin embargo, hay algunos indicios que apuntan en esa dirección. Por ejemplo, los abogados de Agora ordenaron un peritaje según el cual la cámara y el micrófono descubiertos en sus oficinas estaban incluidos en la lista de equipos especiales para la obtención secreta de información, que pueden ser utilizados solo por agencias estatales. Un mes después de que se encontrara la cámara, se abrió un caso criminal contra Agora, acusándola de evadir impuestos. El caso fue posteriormente desestimado.

El 5 de octubre de 2012, el canal de televisión nacional NTV mostró la película “Una anatomía de la protesta - 2”, que contenía imágenes tomadas con una cámara oculta de una reunión de la oposición con sede en Moscú, organizada por Serguéi Udaltsov, Leonid Razvozzhaev, Konstantin Lebedev y el político georgiano Givi Targamadze. Los realizadores alegaron

“

En el período comprendido entre 2007 y 2015, los tribunales rusos de jurisdicción general consideraron 4.659.325 solicitudes para monitorear e interceptar llamadas telefónicas y otras comunicaciones, y aprobaron 4.517.515, o el 96,96%, de esas solicitudes.

”

que el material mostraba a un grupo discutiendo la organización de disturbios civiles y la financiación externa para el movimiento de la oposición.¹⁰ Udaltsov, Razvozzhaev y Lebedev fueron posteriormente declarados culpables de organizar disturbios y condenados a largas penas de prisión.

Las invasiones a la privacidad de líderes de la oposición y activistas también han incluido la inspección de correos electrónicos y otras correspondencias digitales. En diciembre de 2011, inmediatamente después de las elecciones parlamentarias que suscitaron protestas masivas en Moscú y otras ciudades de Rusia, un medio de comunicación favorable al gobierno publicó extractos de la correspondencia de funcionarios de la importante organización no gubernamental Golos, que supervisó de forma independiente el proceso electoral. El medio anunció que había obtenido 60 megabytes de correspondencia electrónica privada que revelaban la financiación de actividades destinadas a desacreditar las elecciones en Rusia.¹¹ Lilia Shibanova, directora ejecutiva de Golos, protestó públicamente, señalando que la correspondencia había sido “tomada desde el buzón” de su segundo, Grigory Melkonyants, que a menudo enviaba mensajes desde su cuenta de correo electrónico bajo sus instrucciones, y que “hackear cuentas de correo electrónico es una violación de la ley”.¹² Melkonyants mismo informó que su cuenta de correo electrónico fue hackeada el 5 de diciembre de 2011, justo antes de una conferencia de prensa sobre las elecciones de la Duma Estatal. Como cuando Agora recurrió a los tribunales por las escuchas en sus oficinas, las autoridades rechazaron todos los pedidos de Golos para abrir una investigación.

A pesar de la falta de pruebas directas de que el hackeo hubiese sido ordenado por el gobierno, la constante negativa de investigar los ataques contra activistas civiles, periodistas y defensores de los derechos humanos suscita serias sospechas. En abril de 2013, la abogada de derechos humanos Marina Dubrovina, tras presentar una orden de representación de intereses del cliente al agente investigador del Departamento de FSB para la región de Krasnodar, se enteró de que sus llamadas telefónicas habían sido interceptadas y su cuenta de correo electrónico hackeada. Esto siguió al hackeo de mayo de 2012 del correo electrónico y cuentas de Skype y Facebook de otros tres abogados de derechos humanos: Olga Gnezdilova, de Vorónezh; Dmitriy Dinze, de San Petersburgo; y Svetlana Sidorkina, de Moscú. Aunque todos los casos fueron denunciados, ninguno de los hackers o los organizadores de los ataques informáticos fueron encontrados ni puestos a disposición de la justicia.¹³

Mientras tanto, la información recolectada a través de esta oscura vigilancia de correos electrónicos se ha utilizado en el procesamiento de actividades políticas y de derechos humanos. En el verano de 2015, la policía detuvo a tres miembros de un grupo de acción que exigía un referéndum “por un gobierno responsable”, abogando por enmiendas a la Constitución y la promoción de una ley de ética para los funcionarios de alto rango de la Federación Rusa. El publicista Yuriy Muhin, el oficial de reserva de la fuerza aérea



Manifestantes gritan consignas contra el gobierno durante una protesta en Samara, Rusia, el 18 de mayo de 2007. Foto: Sergey Ponomarev/AP

Kiril Barabash, el administrador de sistemas Valeriy Parfenov y el periodista Alexander Sokolov de RBC fueron acusados de participar en las actividades de una organización extremista.¹⁴ Una pieza clave de las pruebas de cargo era la correspondencia de Gmail entre los acusados, que fue entregada a los investigadores por un agente que se había infiltrado en el grupo y estaba incluido en la lista de destinatarios de correo electrónico.

Al igual que con las grabaciones clandestinas de video y de audio, la vigilancia de correos electrónicos privados y otra correspondencia digital se ha utilizado específicamente para desacreditar a defensores de los derechos civiles y humanos. En marzo de 2016, como parte de una operación que tenía la clara intención de manchar a Igor Kalyapin, director del Comité para la Prevención de la Tortura, que trabaja con frecuencia en Chechenia, el canal de televisión local mostró sus comunicaciones SMS. Los mensajes de texto, que se remontaban a noviembre de 2014, evidentemente habían sido obtenidos por las autoridades policiales en el curso de sus actividades operativas.¹⁵

De modo similar, en marzo de 2016, la emisora nacional de televisión Pyatyi Kanal [Canal Cinco] mostró dos cortometrajes sobre las actividades del grupo de defensa de los derechos civiles *Komanda-29*, que se especializa en la defensa de quienes han sido acusados de alta traición y lidian con asuntos relacionados a la

divulgación de secretos de Estado. Ambos informes acusaban a los abogados de *Komanda-29* de trabajar para otros países, ofreciendo como pruebas sus documentos y correspondencia de correo electrónico. Según Ivan Pavlov, director de *Komanda-29*, la información había sido obtenida como resultado de la inspección de correos electrónicos.¹⁶

conclusión

Cuando en 2007 Sergey Shimovolos bajó del tren en la estación de Samara y fue detenido por la policía, no sabía que desde 2005 las autoridades rusas habían estado desarrollando un sistema de control integrado que se utilizaba para atacar a activistas políticos y defensores de los derechos civiles. En los años transcurridos desde que a Shimovolos se le dijo que estaba en “la base de datos”, este sistema de vigilancia no ha hecho más que expandirse. Los litigios llevados adelante por Shimovolos y muchos otros activistas y organizaciones en los últimos diez años han revelado un sistema que incluye la vigilancia de los movimientos de los individuos dentro de la Federación Rusa y en los pasos fronterizos, intervención de comunicaciones telefónicas, grabaciones secretas de audio y video e inspección de correspondencia por correo electrónico y hackeo de cuentas de servicios de internet. A medida que estos poderes han crecido, son cada vez más

utilizados para monitorear y desacreditar a aquellos a quienes el gobierno designa como “la quinta columna” y “traidores nacionales”.

De hecho, los casos descritos muestran de qué manera, en ausencia de un control público y judicial, un sistema de vigilancia establecido formalmente para contrarrestar e investigar delitos puede convertirse en una herramienta de persecución política. Y aquellos que se convierten en el blanco de ese sistema disponen en Rusia de pocas opciones: ni un solo caso que involucre la intervención injustificada de comunicaciones por correo electrónico, correo postal o teléfono, el monitoreo de redes sociales y de la actividad en internet, la grabación encubierta de audio y video, o la vigilancia física ha dado lugar a procedimientos legales o sanciones a los responsables. En cualquier sociedad, tales poderes irrestrictos de vigilancia tendrían seguramente un efecto negativo en las voces disidentes y organizaciones de la sociedad civil; más aún cuando están acompañados, como ha sido recientemente el caso en Rusia, con esfuerzos por parte de las autoridades para penalizar a una amplia variedad de actividades cívicas y políticas.

El hecho de que esto esté ocurriendo en Rusia, que nunca ha conseguido deshacerse de las estructuras del estado de vigilancia soviético, plantea desafíos particulares para afrontar esta nueva ola de vigilancia incontrolada y arbitraria hacia millones de residentes rusos. En muchos países, las revelaciones de Edward Snowden provocaron una seria reflexión y debate sobre los límites de la intrusión del Estado en la vida privada y familiar. No así en Rusia. De hecho, a pesar de que a Snowden se le concediera asilo provisional en Rusia en julio de 2013, en una encuesta realizada por la Fundación de Opinión Pública, el 41% de los rusos confesó que nunca había oído hablar de Snowden o de sus revelaciones. Y las noticias sobre casos específicos de vigilancia por motivos políticos en Rusia a menudo son recibidas con un encogimiento de hombros; un legado de la era soviética que se caracterizó por las actitudes de “todos están bajo vigilancia” y “no tengo nada que ocultar”. Incluso la reciente noticia de que una gran cantidad de información personal sobre propiedades, estados de salud, documentos personales, comunicaciones, viajes y transacciones financieras que se encuentran en las bases de datos controladas por el Estado también están disponibles en el mercado negro, ha hecho poco para cambiar esas actitudes profundamente arraigadas. Pero cuando un gobierno acumula más y más datos personales y ni siquiera tiene la voluntad de almacenarlos de forma segura, ya no son solo los opositores políticos los que deberían estar preocupados por su mirada indiscreta.

notas

-

1. Todos los viajeros de Moscú a Samara en la víspera de la Cumbre estaban bajo sospecha. Algunas personas fueron detenidas. Ver NEWSru.com 17 de mayo, 2007. Disponible en: http://www.newsru.com/russia/17may2007/samara_zaderj.html [28/10/2016].
2. Una ley de 2001 promulgada por la Federación de Rusia ordenó que los pasajes de tren solo podían venderse presentando un pasaporte válido y con el registro de los datos personales del viajero. En 2004 esta exigencia se amplió a los viajes aéreos y, en 2012, al servicio de autobuses interregionales. Por lo tanto, cada vez que alguien en Rusia compra un pasaje doméstico, su información personal y su itinerario quedan a disposición de las autoridades. Para Shimovolov y otros activistas de derechos humanos, así como para la oposición y los periodistas, estos requisitos suponen que a menudo se vean obligados a cancelar y comprar pasajes a último momento con la esperanza de llegar a destino sin detenciones ni interrupciones.
3. “Estrasburgo admitió la existencia de ‘listas negras’”, por Alexandra Koshkina, *Gazeta.ru* (21 de junio, 2011). Disponible en: <https://www.gazeta.ru/social/2011/06/21/3670661.shtml> [28/10/2016].
4. “MI negó la existencia de la Base de datos de vigilancia”, por Anna Pushkarskaya, *Kommersant* (23 de junio, 2011). Disponible en: <http://www.kommersant.ru/doc/1664976> [28/10/2016].
5. Ley Federal No114-FZ. Disponible en: <http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102108221&backlink=1&nd=10207922> [28/10/2016].
6. Disponible en: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> [28/10/2016].
7. “El Tribunal determinó que la orden de búsqueda en la Asociación Agora es legal”, *Open Information Agency* (18 de agosto, 2009). Disponible en: <http://openinform.ru/news/pursuit/19.08.2009/13402/> [28/10/2016].
8. “Encontraron más dispositivos de interceptación y una cámara oculta en la oficina de Navalny”, Radio Svoboda (6 de agosto, 2012). Disponible en: <http://www.svoboda.org/a/24668525.html> [28/10/2016].
9. “El canal de televisión NTV mostró imágenes tomadas por una cámara oculta de líderes de la oposición”, RBC (1 de abril, 2016). Disponible en: <http://www.rbc.ru/rbcfreenews/56fe9b1a9a794742ee8a7f90> [28/10/2016].
10. “Una anatomía de la protesta - 2’: NTV sospecha de S. Udaltsov por alta traición”, RBC (5 de octubre, 2012). Disponible en: <http://www.rbc.ru/politics/05/10/2012/673004.shtml> [28/10/2016].
11. “Life News publica la correspondencia entre ‘Golos’ y el Departamento de Estado de EE.UU.”, *Lifenews.ru* (8 de diciembre, 2011). Disponible en: <http://lifenews.ru/news/76604> [28/10/2016].
12. “‘Golos’ llevará el caso a la corte”, *Interfax* (9 de diciembre, 2011). Disponible en: <http://www.interfax.ru/russia/220999> [28/10/2016].
13. “Cómo se obstruye el trabajo de los abogados en Rusia. Un informe de defensores de los derechos”, *Novaya Gazeta* (23 de septiembre, 2013). Disponible en: <https://www.novayagazeta.ru/articles/2013/09/23/56486-kak-v-rossii-meshayut-rabotat-advokatam> [28/10/2016].
14. “El caso ‘ZOV’” (del grupo de acción por el referéndum), Centro de derechos humanos Memorial (29 de octubre, 2015). Disponible en: <http://memohrc.org/special-projects/delo-igpr-zov> [28/10/2016].
15. Informe de la Radio Estatal de Chechenia y de la emisora de televisión de Grozni (16 de marzo, 2016). Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?t=185&v=-oHQNSK6E5I> [28/10/2016].
16. Informe de Pyatyy Kanal (6 de marzo, 2016). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=0L_MmETZgms [28/10/2016].

Un vistazo a la vigilancia en Rusia

¿Los ciudadanos saben más ahora que hace tres años acerca de las actividades de vigilancia del gobierno?

No.

¿Las revelaciones de Snowden condujeron a un debate público significativo en su país acerca de los límites adecuados de la vigilancia?

A los rusos no parece importarles en absoluto las revelaciones de Snowden. La discusión alrededor del caso Snowden se centró principalmente en la relación entre Rusia y Estados Unidos y la decisión de darle asilo.

Después de las revelaciones de Snowden, ¿ha habido otros informantes que hayan decidido filtrar información al público acerca de la vigilancia gubernamental?

No.

En los últimos tres años, ¿las autoridades a cargo de la vigilancia de seguridad nacional del gobierno se han reducido, han aumentado o ninguna de las dos opciones?

Han aumentado.

En los últimos tres años, ¿se han impuesto nuevos controles estructurales sobre los servicios de inteligencia (por ejemplo, nuevos requisitos de transparencia)?

No, a pesar de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso *Roman Zakharov v. Rusia*.

Si el poder legislativo/Parlamento considerara una nueva legislación sobre vigilancia gubernamental, ¿dicha legislación restringiría o ampliaría su poder de vigilancia?

Lo ampliaría. Desde 2012 el Parlamento ruso ha adoptado docenas de leyes que limitan los derechos y las libertades civiles.

Si el poder legislativo/Parlamento considerara una nueva legislación relativa a la vigilancia del gobierno, ¿dicha legislación impondría nuevos controles estructurales?

No. En el Parlamento ruso no hay ningún partido político que se centre en controlar a los servicios de seguridad.

Durante los últimos tres años, ¿las autoridades a cargo de la vigilancia de seguridad nacional gubernamental han sido objeto de litigio interno, incluso en los tribunales constitucionales?

No.

Durante los últimos tres años, ¿los tribunales han rechazado algún aspecto de la vigilancia gubernamental por ser incompatible con la Constitución y los derechos humanos?

Sí. El 22 de marzo de 2016 uno de los tribunales de distrito de Moscú rechazó la decisión de multar a una compañía llamada

de Yandex por negarse a darle al Servicio Federal de Aduanas los datos personales de sus usuarios, incluyendo mensajes electrónicos.

Durante los últimos tres años, ¿cree que la población ha llegado a confiar más, menos o no ha modificado su percepción sobre las agencias de inteligencia?

Más. Entre 2013 y 2015 el número de quienes confían en el servicio de seguridad del Estado se incrementó del 36% al 50%.